



Rasgos mafiosos en la cultura política colombiana

Deicy Hurtado Galeano

Catalina Tabares Ochoa

Parece ser ya un rasgo normal del sistema político colombiano que sus actores protagónicos —gobernantes, congresistas, miembros de partidos políticos y élites económicas— tejan imbricadas relaciones con las distintas mafias, entre ellas las contra-estatales y las paraestatales, que controlan no sólo el negocio de las drogas y las armas, sino el de las mercancías que inundan los mercados formales e informales de nuestras ciudades, los juegos de azar y contratos de prestación de servicios de muy diversa índole, entre los cuales el del transporte es el más evidente, pero no el único. Tanto se han normalizado este tipo de relaciones, que gran parte de los colombianos ha asumido que

“así funciona la política”, aunque otros se sienten hastiados con las innumerables piezas periodísticas sobre la “Yidis-política” y las notarías, sobre las visitas indebidas de emisarios de la mafia al Palacio de Nariño, sobre las relaciones de un jefe seccional de fiscalía con la mafia, sobre los dineros de Agro Ingreso Seguro para financiar proyectos de personajes procesados por su vinculación con negocios ilícitos, sobre los crípticos sistemas de contratación entre Estado y empresas privadas. Y se sienten hastiados, no precisamente porque lo consideren repugnante o inmoral; bien lo expresó una vez un ciudadano de a pie cuando dijo: “hasta la sopa del almuerzo los noticieros nos condimentan con una

historia que sabemos hace tiempo: que los gobernantes y los políticos están untados hasta el tuétano con los negocios de la mafia”, y agregaba: “¿y nos van a seguir martillando con el asunto?”

Sin embargo, recientemente en Colombia se asiste a una fascinación por el mundo mafioso recreado por piezas telenovelescas y afirmado por el *rating* que las series de los canales privados han obtenido: parece que en este país preocupara menos cómo la mafia ha terminado insertándose en el Estado, transformando la institucionalidad y dirigiendo los destinos colectivos, que ver la opulencia y las excentricidades de los capos, los lugartenientes y sus mujeres que atrapan la atención de todos los televidentes, dejando de lado los excesos y sevicia con que han cometido sus crímenes, así como la relación con periodistas, políticos y altos funcionarios públicos. Y es que, como diría Roberto Saviano, autor de *Gomorra*, “La mafia parece moda, mientras el Estado es obsoleto” (Revista *Semana*: abril de 2009).

Podríamos preguntarnos si estas series de televisión, así como las numerosas películas que han abordado este tema, contribuyen a esa necesaria mirada en el espejo para asumir una conciencia crítica sobre la realidad vivida. Ello bien podría ser objeto de otro artículo, pero la pregunta que nos asalta es si en Colombia no sólo se asiste a la configuración de una “cultura mafiosa”, sino también a una cultura política que, a la manera de caja de herramientas, se va cargando cada vez más de insumos, instrumentos, prácticas, símbolos y costumbres legados por los mafiosos y su mundo, que parecieran ser más fáciles de aprender que los tan anhelados republicanos valores cívicos.

Por supuesto, se trata de una cultura política mafiosa que no sólo se construye, aprende y expresa en las altas instancias de los político (elecciones, congreso, leyes), sino en los históricos arreglos de élite y en la institucionalidad formal con los “jefes” de la mafia, tan denunciados hoy día en los noticieros y ambientados en las series de televisión. Una cultura política mafiosa que también se construye,

aprende y expresa en la vida cotidiana, que anida en la subjetividad de los ciudadanos comunes y corrientes, y que ha logrado hacer parte de las “representaciones simbólicas” con las que se siente, se vive y se actúa en la política. Se trata de una dimensión casi imperceptible y difícil de asir, pero contundente a la hora de explicar el comportamiento político de los “protagonistas” de la política (gobernantes, representantes, funcionarios) y del ciudadano común que, en algunas ocasiones, participa activamente en la esfera pública y en otras, es un receptor pasivo de las implicaciones que tiene la toma de decisiones de otros.

Cuando hablamos de cultura mafiosa nos referimos a prácticas como sacar ventaja con el mínimo esfuerzo, otorgar al dinero y al poder una supremacía que pone en jaque las virtudes ciudadanas e incurrir en negocios y transacciones ilegales; en suma, nos referimos a procedimientos que promueven el facilismo, la trampa, el chantaje para el ascenso económico, social y político. Y en las que, además, se acude al aniquilamiento del otro

para acceder al poder, con una sevicia que genera miedo paralizante en muchos y fascinación por el lujo y el derroche en otros.

En el sistema político son espantosamente comunes la financiación de campañas políticas con dineros provenientes del narcotráfico, la corrupción que implica la compra de votos, el desvío de los recursos, el enriquecimiento personal de quienes ocupan cargos públicos, el clientelismo expresado en intercambio de favores, la asignación de puestos por nominación personal directa y, aún más grave, la conversión de los derechos ciudadanos en prebendas. Pero los ciudadanos tendemos a ver estos rasgos como ajenos. Apenas sí nos atrevemos a preguntar: ¿cómo han operado en nosotros? ¿Cómo los reproducimos? ¿Cómo afectan nuestras prácticas, comportamientos y procederes? Porque, aunque por momentos consideremos esta realidad como ajena, cierto es que permea nuestras rutinas y, aunque nos cueste reconocerlo, transitamos a menudo por esa delgada línea que hace difícil

discernir entre lo legal y lo ilegal. Sin darnos cuenta, todas estas prácticas se van incrustando en el fuero interno de los sujetos, hasta normalizarse y reproducirse en la vida cotidiana.

La invitación, entonces, es a virar la mirada, dejando de lado, por un momento, al capo o al político corrupto, y ubicando en el centro al

ciudadano común, aquél que con sus prácticas cotidianas, representaciones e imaginarios forma cultura política, y que con prácticas tramposas también reproduce los rasgos mafiosos en la cultura política.

Deicy Hurtado Galeano y Catalina Tabares Ochoa son profesoras del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia.